Ramón Casilda Béjar*

EL NACIONALISMO DE LA ENERGÍA EN AMÉRICA LATINA

Este trabajo representa, de alguna manera, una continuación de mis reflexiones y planteamientos que realizaba con anterioridad en estas mismas páginas hace algunos años sobre «Energía y desarrollo económico en América Latina». En esta ocasión, lo hago sobre el impacto del nacionalismo del petróleo, teniendo en cuenta que continúa su alta importancia para poder entender el desarrollo económico de la región, y por otro, como uno de los retos que se plantea a los Gobiernos y a las empresas en el nuevo entorno económico, donde los monopolios petroleros más históricos han desaparecido, como es el caso de Pemex en México, que con la llegada de la inversión privada, se abren nuevas vías de organización, estructura y competitividad para el sector y las empresas, que necesariamente deberán adaptarse a estas nuevas reglas de juego más abiertas, que impulsan una mayor competencia nacional, regional y global.

Palabras clave: competencia, desarrollo económico, energía, gas, inversiones privadas, inversiones extranjeras, nacionalismo, política energética, precios, petróleo, reformas, regulación.

Clasificación JEL: O13, O54.

1. La energía en América Latina

Este artículo es, de alguna manera, una continuación de las reflexiones y planteamientos que realizaba en el trabajo «Energía y desarrollo económico en América Latina», publicado en el *Boletín Económico de ICE*, n° 2750 del 2 al 8 de diciembre de 2002. Por lo cual, sirvan estas nuevas reflexiones y planteamientos como estímulo para un tema que, lejos de agotarse, representa todo lo contrario, por ser el petróleo una de las claves que más inciden para bien o para mal en el desarrollo y el crecimiento de América Latina.

Comenzaré destacando que después de Oriente Medio, América Latina, es el continente que cuenta con las mayores reservas petroleras del planeta. Solo Venezuela dispone de mayores reservas que Arabia Saudí; y Brasil, por su parte, ha logrado extraer tanto petróleo en aguas abiertas que se convirtió en exportador neto. Energía, economía, finanzas y política se encuentran muy relacionados en América Latina. En efecto, disponer por parte del Estado de una empresa petrolera, de electricidad o de gas, se considera un signo de «soberanía nacional», y los símbolos nacionales tienen un valor muy alto en la región, donde los recursos energéticos son explotados por empresas internacionales desde hace siglos, por lo cual, el hecho de que los países puedan disponer de sus propios recursos constituye ▷

* Profesor del Instituto Universitario de Estudios Latinoamericanos. Universidad de Alcalá.

Versión de julio de 2016.

mucho más que una inversión de capital: se considera un símbolo de soberanía nacional. Refleja también el deseo de poder utilizar los recursos en beneficio propio, para sí mismos y no para países o empresas extranjeras, parecería ser este el deseo mayoritario de muchos latinoamericanos, siendo un deseo que en principio no se les puede reprochar.

Ahora bien, esto no quiere decir que el resto de los países no tengan también la misma relación especial con sus recursos energéticos, sobre todo, cuando se supone que se trata de reservas estratégicas. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, también tienen sus limitaciones, pues los estados norteamericanos (con excepción de Texas, Luisiana y Mississippi) prohíben la extracción de petróleo en sus aguas territoriales por parte de empresas extranjeras.

Por lo tanto, América Latina no se diferencia del resto del mundo, sino en la medida y manera que se conectan entre sí, sobre todo, la política y la energía, utilizándose la energía como una herramienta cómoda y poderosa para hacer política. En 2005, cuando Buenos Aires vivió un verano extremadamente caluroso, el presidente Néstor Kirchner, dispuso que el gas argentino se destinara de manera prioritaria al consumo interno; a partir de entonces, se exportó menos a Chile. Como consecuencia, hubo que racionalizar el suministro en Santiago. Más conocida fue la negativa de Bolivia a venderle gas a Chile, país al que le presiona para obtener una salida al mar, hasta el momento sin éxito.

Ahora bien, una política de nacionalización del petróleo y del gas tiene dos caras, una favorable y la otra no tanto. Entre los aspectos positivos se encuentra el hecho de que los ingresos les otorgan a los países un margen mayor de acción, interno y externo. En algunos casos, como en México o Venezuela, los ingresos de las compañías petroleras estatales, fluyen en gran parte hacia el presupuesto público y financian al Estado. La nacionalización

impide, además, que las multinacionales (sobre todo las estadounidenses) se inmiscuyan indirectamente en los asuntos de política interna, funcionando prácticamente como una medida defensiva o neutralizadora contra las intrusiones extranjeras.

Para los que conocen la historia de las relaciones entre América Latina y Estados Unidos, esta actitud resulta comprensible. Por ejemplo, durante la presidencia del General Lázaro Cárdenas¹ se promulgó la nacionalización del petróleo mexicano y la creación de Petróleos Mexicanos (Pemex, 1938)². Se nacionalizaron 17 empresas, tanto de capital mexicano como extranjero (británicas, estadounidenses y holandesas). Las consecuencias fueron la ruptura de relaciones diplomáticas con el Reino Unido y el embargo comercial por parte de Estados Unidos y Holanda. Para demostrar la importancia que otorgaban los mexicanos a esta decisión, alcanza con mencionar que tiene rango constitucional. La nacionalización y la futura explotación de los recursos quedaron plasmadas en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: «La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originariamente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad ▷

¹ Lázaro Cárdenas es una de las figuras más respetadas de la historia de México y es junto a Benito Juárez uno de los presidentes mejor recordados en el imaginario popular. El general Cárdenas, ejerció la presidencia de la República de los Estados Unidos Mexicanos entre 1934 y 1940, formando parte del Partido Nacional Revolucionario, precursor del PRI (Partido Revolucionario Institucional) que gobernó en México entre 1929 y 2000 de manera ininterrumpida y que nuevamente bajo el mandato de Enrique Peña Nieto desde 2012, vuelve a ostentar el poder.

² Petróleos Mexicanos es la empresa pública con fines productivos que tiene por objeto realizar las actividades que le corresponden en exclusiva al Estado mexicano en el área estratégica del petróleo, y demás hidrocarburos y la petroquímica básica. Pemex es de las pocas empresas petroleras del mundo que desarrolla toda la cadena productiva de la industria, desde la exploración, hasta la distribución y comercialización de productos finales. Según el anuario estadístico de 2014, sus reservas y producción de hidrocarburos totales fueron de 43.562,6 MMbpce. Tiene 344 campos de producción, 6.382 pozos de explotación, 225 plataformas marinas, 6 refinerías, 8 complejos petroquímicos, 7.896 km de gasoductos, 4.548 km de oleoductos y 19 terminales de distribución de gas natural.

privada. Las expropiaciones solo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización. La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana... Corresponde a la nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas...».

Esta actitud restrictiva fue a menudo criticada y el presidente Vicente Fox (PAN, 2000-2006) intentó incluso modificarla, aunque sin éxito alguno. Posteriormente, el Pacto por México (2012), acordado entre los principales partidos³ a propuesta del recién elegido presidente; Enrique Peña Nieto (PRI, 2012-2018), contemplaba la Reforma Energética como punto fuerte, «con el propósito de convertir al sector en uno de los más poderosos motores de crecimiento económico a través de la atracción de inversión, el desarrollo tecnológico y la formación de cadenas de valor». La Reforma contempla como compromiso en el área de petróleo y gas, «transformar a Pemex en una empresa pública de carácter productivo, que se conservaría como propiedad del Estado pero que tenga la capacidad de competir en la industria hasta convertirse en una empresa de primera clase mundial».

La Reforma fue aprobada por el Congreso mexicano (2013), con lo cual se facilitaría promover

³ El Pacto por México se firmó el 2 de diciembre de 2012, entre el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y las dos mayores fuerzas políticas con mayor representación, el Partido de Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD). El Pacto consta de noventa y cinco puntos que transformarían al país logrando de esta manera la democratización de la economía y la política, así como la ampliación y aplicación eficaz de derechos sociales, al mismo tiempo que el país crecería a tasas del 5 por 100.

Reforma Energética de 2013 en México

Representa una reforma constitucional cuya iniciativa fue presentada por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el 12 de agosto de 2013. Fue aprobada por el Senado de la República el 11 de diciembre de 2013 y por la Cámara de Diputados un día después. El 18 de diciembre de 2013, la reforma fue declarada constitucional por el Poder Legislativo Federal; fue promulgada por el Ejecutivo el 20 de diciembre de 2013 y publicada al día siguiente en el *Diario Oficial de la Federación*. La iniciativa que el Ejecutivo Federal somete a la consideración del Congreso de la Unión propone que el artículo 27 de la Constitución vuelva a decir lo que el presidente Lázaro Cárdenas dejó escrito, palabra por palabra, para desarrollar la industria petrolera bajo la rectoría del Estado. Asimismo, se promueve el desarrollo de un sistema eléctrico nacional basado en principios técnicos y económicos, bajo la conducción y regulación del Estado. Los objetivos de esta Reforma Energética son los siguientes: 1) Mejorar la economía de las familias, bajarán los costos de los recibos de la luz y el gas. Al tener gas más barato se podrán producir fertilizantes de mejor precio, lo que resultará en alimentos más baratos. 2) Aumentar la inversión y los empleos, se crearán nuevos trabajos en los próximos años. Con las nuevas empresas y menores tarifas habrá cerca de medio millón de empleos más en este sexenio y 2,5 millones más para 2025, en todo el país. 3) Reforzar a Pemex y a CFE; se le dará mayor libertad a cada empresa en sus decisiones para que se modernicen y den mejores resultados. Pemex y CFE seguirán siendo empresas 100 por 100 de los mexicanos y 100 por 100 públicas. 4) Reforzar la rectoría del Estado como propietario del petróleo y gas, y como regulador de la industria petrolera.

por un lado un crecimiento del 60 por 100 del sector petrolero y por otro concluir con el monopolio que, durante 75 años, ha mantenido Pemex, si bien continúa en el centro de la economía mexicana como punta de lanza o motor económico tal como venía siendo desde su nacionalización.

Los objetivos que persigue la reforma son el incremento de la producción, transformación y distribución de hidrocarburos, con lo cual será posible, en el mediano plazo, reducir los precios del gas natural y electricidad que pagan los hogares y empresas del país, permitiendo que México crezca más rápido y que su economía ▷

sea más competitiva a nivel global. Primero, porque esta reforma atraerá grandes inversiones al país, generando cientos de miles de nuevos empleos, tanto en el sector energético, como en el resto de la economía. Segundo, porque las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, tendrán más energía y a menor precio; serán más rentables, podrán crecer y contratar a más personas. Y tercero, porque con ésta y otras reformas y acciones que estamos impulsando, estamos creando nuevas bases para el desarrollo económico. Todo esto significa que estamos impulsando un cambio profundo en la forma de hacer las cosas. Es, sin duda, un cambio en favor de todos los mexicanos. México está destinado a crecer y ser exitoso, pero es necesario que todos hagamos nuestra parte, explicaba el presidente Enrique Peña Nieto.

Al conmemorar en 2014 el 76 aniversario de la nacionalización de Pemex, y el año de puesta en marcha de las nuevas medidas de liberación, el presidente Peña Nieto indicó «El país iba directo a ser un importador neto de petróleo y gas natural, frente a esto había dos opciones, seguir por el mismo camino o emprender una transformación a fondo. Es tiempo que los recursos energéticos permitan al país ser más dinámico, competitivo y próspero», en definitiva, que conduzca a un mayor bienestar de los mexicanos.

Está claro, que por lo general, los latinoamericanos tienen una conciencia nacional muy marcada respecto a la energía. Esto podría deberse a que el «nacionalismo» en ocasiones es el único eslabón que mantiene unidas a sociedades muy heterogéneas, y las materias primas, sobre todo el petróleo y el gas, son esa clase de símbolos necesarios para mantener vivo el eslabón del nacionalismo. Como símbolo nacional reemplaza el consenso social, y cuanto más grande es la brecha entre ricos y pobres, mayor es la necesidad de realizar acciones de compensación para mantener el país unido, y no olvidemos que la región a pesar de los avances en la disminución de la

pobreza, la desigualdad en la distribución de la riqueza continúa siendo la mayor del mundo.

Dado que los países latinoamericanos con reservas de petróleo y gas se encuentran entre las más grandes del mundo, deberían contar un alto nivel de vida. Sin embargo, no es así. Al contrario, los países petroleros suelen ser países desiguales, poco industrializados e innovadores, cuyas empresas por lo general tienen escasa presencia en la economía internacional. Además, ni la industria del petróleo ni la del gas, ni tampoco la minera, generan empleos masivos y de calidad. Por ejemplo, el valor añadido del petróleo se lleva a cabo después del refinamiento y la comercialización. Es evidente, pues, que el petróleo no es en sí una condición suficiente para el bienestar. En ese sentido, tal vez sea Noruega el único país que utiliza su riqueza petrolera para promover el bien común o bienestar social.

Para que un país sea próspero, no es suficiente con tener las mayores reservas de petróleo o gas, aunque se implementen políticas públicas motivadas inicialmente por el deseo de promover el crecimiento, que en principio conllevan diversos peligros: exceso de inversión o elección del sector ganador que puede ser equivocado, poco control sobre la corrupción y poca transparencia. Este modelo puede fácilmente transformarse o derivar en «*capitalismo oligárquico o de amiguetes*», orientado a proteger y enriquecer a una fracción muy estrecha de la población, donde el crecimiento económico no es un objetivo central.

Históricamente, las políticas practicadas desde el nacionalismo energético, como se ha comprobado, frenan el desarrollo del sistema productivo impulsado por la iniciativa privada, con todas las consecuencias que conlleva no solo en el corto plazo, sino que en el largo plazo provocan un retroceso en la capacidad de generación de riqueza del país, como un alejamiento de la inversión extranjera directa del sector. ▷

Ahora bien, no solo en América Latina, sino también en Rusia y en Oriente Medio, observamos cómo el nacionalismo energético frena a la economía. Aunque los ingresos del petróleo vuelven generosos a los Gobiernos, al menos mientras se mantienen los precios, lo grave es que generan una cultura asistencialista e incluso conformista que es difícil de erradicar. Un buen ejemplo lo representa Venezuela. El hecho de que un país tan bendecido por la naturaleza (como otros países latinoamericanos)⁴, y por tanto rico, tenga que pedirle a Cuba maestros y médicos para cubrir sus necesidades básicas, expresa la incapacidad de la riqueza petrolera y sus deficientes resultados de acuerdo con sus potencialidades que reclaman que las inversiones sean orientadas a los sectores que establecen las bases para la verdadera riqueza de una nación: educación, instituciones, investigación e infraestructuras.

Además, el nacionalismo energético genera una desventaja adicional: disminuye las posibilidades de modernización, innovación y producción. México es un ejemplo de ello. El Estado obligó a Pemex a pagar impuestos muy superiores a lo que le correspondía, y por esa razón no se realizaron las inversiones necesarias para explorar nuevos yacimientos. Por otra parte, como las empresas internacionales no tenían permiso para operar en el territorio, comenzó a extraerse menos petróleo y menos gas; llegando el caso de tener que importar gas.

2. Importancia del sector energético en el desarrollo económico latinoamericano

América Latina, en general, es una referencia donde pueden apreciarse diferentes ejemplos de cómo la política energética y la actuación del «sector público» y de los agentes privados, puede afectar al desarrollo económico.

⁴ La generosa lotería de productos otorgados por la naturaleza, más lo que le permitió que el hombre introdujese: café, cereales, ganado...

El análisis del sector energético es fundamental para poder entender el desarrollo económico latinoamericano y especialmente de países como Venezuela cuya dependencia del petróleo supone el 25 por 100 del PIB, el 40 por 100 de los ingresos y el 95 por 100 de las divisas por exportaciones. También es el caso de México, que si bien ha diversificado su canasta exportadora, buena parte de los ingresos fiscales proceden del petróleo, pero no sufre como Venezuela porque el 90 por 100 de sus exportaciones ya son manufacturas y productos agrícolas. Aunque una gran parte de su renta se basa en la explotación de los recursos energéticos y las finanzas públicas, se apoyan de forma prioritaria en los ingresos de dicha explotación y en los impuestos asociados al consumo de energía.

Siendo la energía un elemento central para el desarrollo económico del continente, constituye una variable decisiva para la generación de crecimiento y empleo. En consecuencia, las importantes reservas de petróleo y gas tienen un significativo papel en la generación de riqueza para las economías que, por otro lado, requieren un suministro eficiente, incorporando los menores costes posibles para favorecer el crecimiento de los diferentes sectores productivos, haciendo posible de esta manera mejoras en las condiciones de vida de sus ciudadanos.

Las necesidades particulares de recursos energéticos han sido habitualmente satisfechas con un grado desigual de cobertura, consiguiéndose generalmente mediante elevados subsidios en las tarifas por su carácter de servicio público y con un elevado sesgo hacia la cobertura de las áreas urbanas, y mayores dificultades para satisfacer las zonas rurales. Considerando los aspectos en los que el sector puede contribuir al desarrollo de las economías de la región y la realidad de éstas, puede considerarse que existen una serie de elementos clave para el avance en materia de energía. ▷

Durante los últimos años, se han ido acometiendo reformas para limitar y definir claramente su papel, pero aún son numerosos los avances pendientes, ya que su posición, en las diferentes etapas del ciclo de producción y comercialización de la energía, puede generar conflictos de intereses. Este puede ser el caso del Estado que, como propietario de los recursos, los explota, los distribuye, los consume y los somete a la fiscalidad correspondiente, siendo todos estos papeles difíciles de compaginar sin que se tengan que aplicar prioridades de índole económica o política, que podrán estar sujetas a cambios en las estrategias o planteamientos de los diferentes Gobiernos. Por tanto, la separación de las funciones del Estado (en ocasiones con reducción de su papel en beneficio del sector privado), siempre deben venir acompañadas de una regulación clara que elimine la posible discrecionalidad en la aplicación de la misma.

Aunque este principio parece asumido y compartido de forma general, su puesta en práctica en América Latina no siempre ha sido fácil. Los principios políticos que inspiran esta separación de funciones y la regulación que determina sus mecanismos de implantación, no siempre están claramente delimitados y muchas declaraciones políticas no siempre encuentran la regulación correspondiente que las respalde.

Redefinir las funciones del Estado en el sector energético supone una reforma de una magnitud importante que en países como México se están llevando a cabo, implicando importantes renuncias a beneficios exigentes por parte de algunos agentes económicos que intentan rentabilizar cualquier reforma mediante la obtención de compensaciones (llamado capitalismo de Estado o de amiguetes). Adicionalmente a estas posibles compensaciones, hay un coste adicional de las reformas que se asocia a la desintegración vertical de actividades que, generalmente, dentro del ámbito estatal, estaban integradas verticalmente.

La situación dificultaba una valoración de las inversiones necesarias y de los costes fijos existentes, de modo que se diluía en el conjunto de la actividad energética del Estado si no en el conjunto del presupuesto, pero estas inversiones y sus costes fijos correspondientes resultan claves a la hora de determinar la secuencia de la separación de funciones. En un plano teórico, la secuencia para la reforma del sector energético se inicia en el establecimiento de un marco regulatorio claro y transparente, continuaría con la reestructuración de los activos públicos y la organización de los mercados, y finalizaría con la privatización, especialmente del sector de distribución. Esta secuencia ideal, además de permitir la privatización, proporcionaría señales claras a los inversores, garantizaría la existencia de compradores solventes en los mercados mayoristas y evitaría las distorsiones que podrían producirse en un mercado que compitiesen empresas privadas con otras de propiedad pública que mantuviesen privilegios normativos.

3. El nacionalismo energético en América Latina

El fuerte crecimiento económico en América Latina, durante el quinquenio 2003-2008, registró un aumento cercano al 5 por 100, nada que ver con el contexto actual, donde la región se contrajo en 2015 un -0,4 por 100 y lo hará nuevamente en 2016 un -0,5 por 100 (FMI, abril 2016). Precisamente, el fuerte crecimiento durante el quinquenio referido incitó a una mayor autonomía política en la mayoría de los países, destacando entre los países productores de hidrocarburos altas olas de nacionalismo energético. El fuerte crecimiento resultó uno de los factores centrales para el surgimiento de las altas olas económicas y financieras de nacionalismo energético, estimulado por los incrementos significativos de los precios del petróleo y el gas. ▷

Los altos precios inyectaban altos ingresos a los Gobiernos, coincidiendo con la creciente voluntad de cambio político, arraigado en ciertos países en favor del «nacionalismo» y en contra de la «globalización». De hecho, en parte de los países exportadores de petróleo y gas existía la percepción de que la globalización económica había fracasado y que las políticas de liberalización e integración no habían podido estimular un desarrollo sostenido y una disminución de la pobreza y de la indigencia.

Al respecto, suele argumentarse que la pobreza y la indigencia crecieron como resultado de las políticas de reformas estructurales puestas en práctica según el Consenso de Washington (CW, 1990-2000), mientras que otros opinan que de no haberse aplicado estas políticas, la pobreza y la indigencia hubiesen sido mayores. Agotado el CW, desde principios del año 2000, con los nuevos Gobiernos nacionalistas de corte más estatista y menos neoliberal, comenzó una mayor intervención pública, junto con una mayor aportación de los organismos multilaterales que ponían más énfasis en su participación por combatir la pobreza y la indigencia, con lo cual, los indicadores mejoraron notablemente, según la CEPAL entre 2003 y 2014 la incidencia de la pobreza disminuyó en 17 países, del 39 al 28 por 100⁵.

Todo esto resultó posible, en gran parte, debido al vigoroso crecimiento de la economía latinoamericana durante el quinquenio dorado de 2003-2008. Esto se producía a la vez que se registraba un salto notable en los ingresos públicos, debido a las constantes subidas de los precios de la energía. En este contexto, por un lado el Estado controlaba cada vez en mayor

medida las rentas producidas por las exportaciones energéticas y, por otro, ganaba terreno la percepción del fracaso de liberalización económica promulgada por el Consenso de Washington. Esta combinación produjo un potente antídoto que posibilitó revertir las reformas, de abrir y liberalizar los sectores energéticos de la región. Una vez conseguido, los líderes más radicales se embarcaron en una nueva ola de nacionalismo energético, que podemos llamarla «renacionalización».

La nacionalización, particularmente en los países andinos como Venezuela, Bolivia y Ecuador, supuso el endurecimiento estatal de las condiciones de acceso al sector, así como nuevas condiciones fiscales de explotación para las empresas privadas internacionales, produciendo un aumento notable de los ingresos estatales por la exportación de hidrocarburos. En esta favorable coyuntura, potenciada por las continuadas subidas de los precios, se reforzó la percepción de autonomía económica y política de los Gobiernos de los países productores, con especial énfasis en los andinos y Brasil, sin olvidar Argentina y las profundas connotaciones nacionalistas que se dieron en la expropiación forzosa de YPF.

Si la experiencia de Venezuela sirve de referencia, se puede apreciar claramente que el efecto combinado de la renacionalización energética y los mayores precios sobre el aumento de los ingresos estatales han resultado al menos muy controvertidos. Por un lado, se encuentran los cambios en el entorno legal que afectan la explotación de hidrocarburos y, por otro, el aumento de impuestos y regalías que las empresas privadas internacionales tienen que pagar al Gobierno venezolano desde un promedio del 20 por 100 hasta el 80 por 100 de los ingresos por exportación. Asimismo, el Gobierno forzó la transformación de los diversos tipos de contratos anteriormente vigentes para crear nuevas *joint ventures*, donde la empresa pública PDVSA siempre tiene una ▷

⁵ Al menos cinco países en 2013 experimentaron la disminución de la pobreza. Paraguay (de 49,6 por 100 en 2012 a 40,7 por 100 en 2013), El Salvador (45,3 por 100 en 2012 a 40,9 por 100 en 2013), Colombia (32,9 por 100 en 2012 a 30,7 por 100 en 2013), Perú (25,8 por 100 en 2012 a 23,9 por 100 en 2013) y Chile (10,9 por 100 en 2011 a 7,8 por 100 en 2013). *Panorama Social de América Latina 2014*. CEPAL, 2015.

participación mayoritaria. Pero a la vez, desde el año 2001 viene experimentado un descenso continuado en su nivel de producción, aunque, debido al aumento progresivo de los precios, ha tenido mayores ingresos y desafortunadamente no se ha sabido aprovechar plenamente el realizar las inversiones pertinentes y, en consecuencia, su productividad ha decaído hasta límites no conocidos, situándose internacionalmente en posiciones realmente bajas.

Además, Venezuela descuidó hasta niveles mínimos la inversión en infraestructuras y otros activos tan necesarios como la educación y la I+D, que indudablemente estimulan un desarrollo económico sostenido a largo plazo, de manera que el país se ha visto relegado a los lugares más bajos de crecimiento económico, competitividad y bienestar social en América Latina. Y todo ello, arrastrando un creciente endeudamiento con su gran benefactor, China.

En efecto, China se ha convertido en el principal acreedor y fuente de financiación de Venezuela. Desde 2007, se han creado dos fondos a través de los cuales el país asiático ha prestado 50.700 millones de dólares, de esa cifra solo se ha cancelado poco más de la mitad. La cuenta por cobrar asciende a 23.000 millones, lo que significa que cada venezolano debe a ese país 761,43 dólares. Suponiendo que los 30.206.307 habitantes de Venezuela (Instituto Nacional de Estadística) tuvieran una tarjeta de crédito con los 300 dólares que el Centro Nacional de Comercio Exterior les autoriza usar en transacciones electrónicas, entonces cada uno debería destinar más del doble de su cupo para pagar la deuda individual con China. Y estas cifras se disparan tras las sucesivas devaluaciones del bolívar y su régimen cambiario.

Para la región, y más concretamente en los países productores, las implicaciones para el medio y largo plazo son claras: un legado poco favorable sobre los futuros niveles de inversión

y de producción, minando, más tarde o más temprano, su competitividad. De hecho, uno de los riesgos energéticos más graves a medio plazo es que los niveles de inversión, tanto para el mantenimiento de la producción como la exploración y desarrollo de nuevos yacimientos de hidrocarburos, no sea suficiente para satisfacer la creciente demanda para un mercado energético regional de 21 millones de kilómetros cuadrados donde viven 550 millones de habitantes. Los países de América Latina aumentarán su demanda de energía entre 2014 y 2017 en casi un 5 por 100 según el estudio de la Comisión de Integración Energética Regional (CIER, 2015). Perú, Costa Rica, Colombia y Bolivia son algunos de los Estados donde más crecerá la demanda.

Esta problemática puede resultar un cuello de botella para el crecimiento de los países y de la región, a pesar de los importantes incrementos registrados de los ingresos energéticos de las empresas estatales y de sus Gobiernos hasta 2011. A partir de esta fecha, han visto como disminuía la intensidad de los ingresos. Entre 2011 y 2015, el desplome de los precios de la energía y los metales (petróleo, gas, carbón, hierro y cobre) fue de casi un 50 por 100 (CEPAL, 2015) y solo los productos energéticos cayeron un 24 por 100. La drástica reducción de los precios ocasiona fuertes restricciones presupuestarias en las empresas estatales como en los respectivos Gobiernos, que han bajado considerablemente sus gastos sociales.

Bolivia, cuyos logros económicos y sociales han sido notables en estos tiempos, se está resintiendo de los bajos precios de la energía. El dato de que con una población de 10,5 millones de habitantes, 2,6 millones se incorporaron a la clase media desde la llegada del presidente Evo Morales, en 2006, mientras que el PIB per cápita pasó de 1.200 dólares a los 3.000 actuales, en tanto el PIB aumento de 8.000 a 33.000 millones de dólares, con un ▷

crecimiento medio anual del 5 por 100, registrando por lo general superávit fiscal y comercial, y con un nivel de reservas de 14.365 millones de dólares (Banco Central de Bolivia, 2015), cercana al 50 por 100 del PIB, uno de los porcentajes más altos del mundo.

El despegue fue posible al obtener importantes ingresos por la venta de gas y de minerales, que posibilitaron mayores gastos del Estado, sobre todo en grandes obras de infraestructura, dadas las altas carencias del país. A estos gastos se sumaron el constante aumento de los salarios, produciéndose de esta manera un fuerte repunte del consumo interno, el cual incentivó la construcción de inmuebles, las importaciones y las actividades financieras. El resultado de estos procesos fue un incremento del bienestar social, pero también un encarecimiento de los bienes nacionales, que representan el «eje central» del modelo boliviano. Aunque durante todos estos años se ha podido constatar que la industria boliviana ha sido incapaz de sustituir las importaciones, incluso en el área de alimentos, en la que Bolivia solía ser autosuficiente.

Al mismo tiempo, se puede comprobar la profundización de la dependencia del país de la extracción de recursos naturales o «reprimarización de la economía», según manifestaba la CEPAL, como claro riesgo para los países exportadores de materias primas, lo cual indica que el decrecimiento del sector primario y el simultáneo retroceso de la industria nacional, permiten diagnosticar a Bolivia como una víctima de la «enfermedad holandesa», un síndrome económico que afecta a las sociedades que reciben súbitamente grandes ingresos que no saben cómo gastar y que terminan despilfarrando en obras faraónicas, importación de productos, fácil endeudamiento y burbujas inmobiliarias. Este modelo, que se fundamenta en los estímulos económicos procedentes de las exportaciones energéticas y de minerales, mientras permanece el marco de referencia,

es sostenible. Sin embargo en la actual coyuntura, la cual, según las predicciones, durante los próximos años permanecerán bajos los precios energéticos y de los minerales, llevarán al país, si antes no lo remedia el Gobierno boliviano, a una crisis parecida a la que hoy vive Venezuela.

En cuanto al resto de los países como Chile, Paraguay, Uruguay, y los de América Central y el Caribe, que son importadores netos, se mantienen en una posición estable dentro de este panorama energético regional.

4. Nacionalismo energético con países claves y modelos diferentes

En América Latina se puede distinguir entre varios países claves y modelos diferentes, según la actitud de sus Gobiernos respecto a la política y el nacionalismo energético.

Los acontecimientos que se han producido en torno al presidente Lula, por sus «presuntas» implicaciones en la trama de sobornos de Petrobras, puso de manifiesto la instrumentalización de la empresa estatal en favor del poder político. Esta instrumentalización, con diferentes intensidades, se reconoce en los presidentes Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela, Dilma Rousseff en Brasil, Rafael Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia, y Néstor y Cristina de Kirchner en Argentina, que han detentado o detentan el poder político en países con abundantes reservas de petróleo y gas.

Todos ellos lo han llevado a cabo con las diferencias derivadas de su personal idiosincrasia, de su manera de entender la política y la economía, y según la tradición industrial de sus países, una política por la cual han considerado prioritario el control por parte del Estado de la actividad empresarial dedicada a la producción de hidrocarburos. Sociedades mixtas con mayoría estatal en Venezuela y en ▷

Bolivia, contratos de servicio en Ecuador o la simple y pura incautación de YPF a Repsol en Argentina, son algunas de las decisiones políticas adoptadas en esa línea (Fernández-Cuesta, 2016).

Pero, así como gran parte de los países exportadores de hidrocarburos de la zona andina han adoptado primordialmente una política nacionalista, claramente liderada por Venezuela, que incluye Bolivia y Ecuador, otros países, como Colombia y Perú, se han desmarcado claramente de este rumbo, siendo sus prioridades una integración energética más abierta e internacional. Este ha sido el caso de México que, tras terminar con el monopolio estatal mediante la reforma energética, es el país que más se ha significado tras derribar el tradicional nacionalismo energético, y por otro lado, en el sentido contrario, se encuentra Argentina con la nacionalización de YPF a Repsol (Buenos Aires, abril de 2012). El argumento que utilizó la presidenta, Cristina Fernández, para justificar la nacionalización, fue que «es la primera vez en 17 años que Argentina tiene que importar gas y petróleo». A partir de ese dato, que nadie cuestiona, se marcó como único responsable del déficit energético a Repsol-YPF, que solo explota un tercio de los hidrocarburos producidos en el país. «Proseguir con esta política de vaciamiento, de no producción, de no exploración, prácticamente nos tornaríamos en un país inviable, por políticas empresariales y no por recursos». Como se pudo comprobar posteriormente, detrás de la expropiación subyace el hecho de que la política energética del Gobierno, basada en subsidios, había fracasado.

No obstante, aunque por diferentes causas, ambos países (México y Argentina) no solo se encuentran con la problemática de la bajada drástica de los precios, que se mantendrán según las predicciones internacionales durante los próximos años, sino también, con la bajada de su producción, aunque este problema obedece exclusivamente a sus empresas. Es

el caso de Pemex, que ha figurado en el *ranking* de las 10 empresas productoras más importantes del sector, que posicionó a México entre las 10 naciones con mayor producción a la altura de Arabia Saudí, Irak, Estados Unidos o Kuwait, por lo menos hasta 2014.

Pero la situación ha variado notablemente, Pemex prevé reducir su producción debido al recorte presupuestario de 2016, que ha descendido hasta un promedio de 2,26 millones de barriles diarios, lo que suma más de dos años de caídas desde los 2,52 millones de media en 2013. El desplome lastra un 0,4 por 100 el alza del PIB de México, y los ingresos de Pemex por exportación descendían en 17.000 millones de dólares debido a los bajos precios del petróleo. A mediados de 2014 el barril de petróleo cotizaba 107 dólares para el crudo ligero de Texas en Nueva York y 112 para el Brent del Mar del Norte, para un año y medio después se negocia a una cuarta parte de aquellos valores, 30,44 y 30,86 dólares, respectivamente.

En cuanto al caso argentino, durante 2015 tras la nacionalización de YPF, se vio en la necesidad de importar petróleo y gas. A partir de 2011, Argentina perdió el superávit comercial energético y actualmente importa más de lo que exporta. En 2011 el déficit comercial del sector fue de 3.189 millones de dólares, mientras que en 2012 se elevó a 4.075 millones. En 2013 experimentó un fuerte aumento hasta los 6.163 millones y en 2014 alcanzó un récord de 8.131 millones de dólares. Actualmente, como entre el 30 y el 40 por 100 de los costos de las compañías que extraen petróleo en el país es en dólares, las sucesivas devaluaciones del peso se trasladan a los precios. A la vez, por decisión oficial, las refinadoras obtienen el barril de crudo argentino en torno a 67,50 dólares, el doble que el del mercado internacional, lo que hace que los precios de venta de los carburantes sean los más altos de la región; el litro de súper es de 1,01 dólares de media, en torno a los 14 pesos, sólo superado ▷

por Uruguay que depende enteramente de la importación de petróleo, donde el precio promedio del litro de súper es de 1,36 dólares, mientras que es más barato en Chile (0,99 dólares), Paraguay (0,96), Perú (0,95), Brasil (0,90), México (0,78), Colombia (0,61), Bolivia (0,50), Ecuador (0,44) y Venezuela (0,02). En EEUU el litro de súper es casi la mitad que en Argentina, 59 centavos de dólar, y en Canadá cuesta 0,80 dólares.

Una paradoja es que Argentina, en 2015, perdió menos dólares por sus compras de energía que por una disminución de la producción nacional. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el déficit energético ascendió a 4.129 millones entre enero y octubre de 2015, mientras que el BCRA, con una base de datos diferente registró un déficit de 4.871 millones. Esto implica que los dos grandes negocios en el país pasan por la compra de combustibles líquidos y de gas natural licuado (GNL)⁶.

Más preocupante es el caso de Brasil, país donde se produjeron, a partir del año 2006, importantes descubrimientos de petróleo en varios sondeos en aguas profundas, conocidos como el Presalino, que abarca varios miles de kilómetros cuadrados, con más de 45.000 millones de barriles, cantidad suficiente como para abastecer el 10 por 100 del consumo mundial durante algo más de 13 años. La decisión del Gobierno brasileño fue aprovechar la oportunidad para recuperar la mayoría accionarial en Petrobras⁷.

La operación para conseguirlo se realizó teniendo en cuenta que el área estaba siendo explorada por diferentes empresas privadas, cuyas actividades habían dado lugar al descubrimiento inicial, pero la mayor parte estaba pendiente de adscripción. De acuerdo con la legislación brasileña, el Estado debía sacarla a concurso. Sin embargo, se modificó la normativa y buena parte del área fue aportada a Petrobras como ampliación de capital suscrita por el Estado brasileño. Obviamente, la ampliación fue objeto de controversia. En una empresa que cotizaba en bolsa, el Estado pasaba a tener más del 50 por 100 del capital a través de la aportación de un área en la que se estimaba que había grandes cantidades de petróleo, pero se ignoraba cuánto y, sobre todo, se requerían ingentes inversiones para materializar el valor aportado. Aunque se incluían cláusulas de salvaguardia, el ejercicio de las mismas entre una empresa de mayoría estatal y el propio Estado brasileño no parecía suficiente garantía para los inversores privados, afectados por esta sutil «nacionalización» (Fernández-Cuesta, 2016).

Petrobras, en septiembre de 2010, acometió la mayor ampliación de capital del mundo, 115.041 millones de reales (unos 66.884 millones de dólares)⁸, con el objetivo de construir plataformas petroleras marítimas, para explotar el campo petrolero de Tupí, coloquialmente llamado campo petrolero Lula (por haberse descubierto durante su periodo presidencial), un gran yacimiento de gas *offshore* situado en la cuenca de Santos, a 250 km de las costas de Río de Janeiro, siendo considerado el mayor descubrimiento en el continente americano de las últimas tres décadas.

Además Petrobras, para poder mantener su nivel de inversión crediticia, necesitó vender 2.400 millones de acciones comunes a un precio de 29,65 reales y 1.870 millones de acciones ▷

⁶ El ministro de Energía argentino, Juan José Aranguren, y su par chileno, Máximo Pacheco, suscribieron un convenio en el que Argentina importará, para el próximo invierno 2016, 5,5 millones de metros cúbicos diarios de gas natural licuado (GNL). El valor del intercambio implicará un desembolso de 130 millones por año. La paradoja del convenio es que, a raíz del déficit energético estructural, Argentina exportaba combustible a Chile, hasta los inicios de la presidencia de Néstor Kirchner. Tras las tasas «chinas» de crecimiento económico de los primeros años y una inversión que se reveló como insuficiente para satisfacer la demanda, las ventas de gas hacia Chile se suspendieron, lo que terminó generando roces en la relación bilateral. Ahora, Argentina ocupa el lugar de Chile.

⁷ En el año 2004-2005, más del 60 por 100 de las acciones pertenecían al capital privado y más del 50 por 100 al capital extranjero.

⁸ Como parte de la operación, Petrobras cedió cerca de 42.500 millones de acciones al Gobierno a cambio del derecho de obtener 5.000 millones de barriles, lo que permitirá al Gobierno mantener su participación y gestión en la empresa.

preferentes a 26,30 reales cada una. Las acciones, previamente a la crisis, alcanzaron su máximo histórico sobrepasando los 75 dólares y posteriormente durante los años de la crisis bajaron todos los años más del 20 por 100 (excepto en 2009). La cotización media en el primer trimestre de 2016 era de 3,29 dólares, esto representa una brutal caída del 95 por 100, que recoge el desastroso ejercicio de 2015 con pérdidas de 34.836 millones de reales (9.600 millones de dólares), un 61 por 100 mayor que el de 2014, de 21.600 millones de reales⁹.

No obstante, el nuevo presidente de Petrobras, Aldemir Bendine, evaluando la situación manifestó: «No podemos hacer una medición del impacto de la situación política sobre nuestras actividades. Nuestro foco es la compañía, el país tiene instituciones bastante sólidas y tenemos confianza en la fuerza del sistema democrático. No nos cabe preocuparnos con esas cuestiones». Está por ver aún cómo afectarán los graves casos de corrupción, si bien no se saben las consecuencias finales y hasta dónde pueden golpear a Petrobras, seguramente hasta niveles no conocidas. Lo que se conoce es que su recuperación es un asunto clave para la economía brasileña y la reputación del país.

Pero el caso más dramático lo constituye Venezuela, tradicionalmente uno de los grandes exportadores mundiales de petróleo y poseedor de las mayores reservas del planeta, que, aunque parezca insólito, ha tenido que empezar a importarlo. PDVSA adquirió en enero de 2016 un cargamento de 550.000 barriles de uno de los crudos marcadores del mercado internacional, el West Texas Intermediate (WTI), a través de su filial en Estados Unidos, Citgo Petroleum. La compra se hizo con el propósito de diluir en el estadounidense volúmenes de

crudos pesados venezolanos –de menor valor en los mercados y de más restringida colocación– en la refinería de Curazao (nación insular de las antiguas Antillas Neerlandesas, vecina a Venezuela), que opera PDVSA.

Para que esta transacción tuviera lugar, debieron cumplirse antes dos hitos históricos: en primer lugar, que Venezuela dadas sus necesidades no cubiertas comenzó a importar crudo, algo sin precedentes en sus 100 años de actividad petrolera. Varios lustros acumulados de gerencia errática y falta de inversión forzaron en 2014 a PDVSA realizar compras desde Argelia, Nigeria y Angola. También desde entonces se importan combustibles y derivados, entre ellos gasolina de EEUU para el abastecimiento interno. Posteriormente, en diciembre de 2015, el Gobierno del presidente Barack Obama levantó la prohibición de exportar petróleo desde EEUU, vigente desde hace 40 años. El superávit de producción norteamericano, impulsado entre otros factores por el auge de la explotación de petróleo de esquistos (*shale oil*), permitió dar luz verde a dicha medida.

Se calcula que Venezuela –cuyo Gobierno no difunde cifras oficiales– produce actualmente unos 2,7-2,8 millones de barriles diarios de petróleo, muy por debajo de los 5 millones que anunciaba el presidente Chávez, para 2016. La mayor parte de la producción la constituyen crudos medios y pesados, los de menor valor en los mercados y de más restringida colocación. La Faja Petrolífera del río Orinoco, en el sureste del país, representa la mayor reserva de petróleo del mundo y es objeto de las ambiciones de las empresas internacionales, algunas de las cuales ya la explotan en asociación con PDVSA, como es el caso de Repsol. Sin embargo, se trata de volúmenes de petróleo pesado y extrapesado que hasta hace poco solo se certificaban como bitúmenes.

La importación, pragmática y oportunista, de crudo procedente de Estados Unidos, no solo ilustra las tribulaciones operativas de PDVSA, ▷

⁹ El precio del barril cayó casi un 50 por 100 en 2015. Fue «un año extremadamente difícil para la industria de petróleo en general», señaló el presidente de Petrobras, Aldemir Bendine. La deuda se ubicaba en 100.379 millones de dólares (31-12-2015), un 5 por 100 inferior al cierre del año anterior, y en reales aumentó un 39 por 100, debido a la desvalorización de la moneda local.

que pasa por «críticas» dificultades financieras, sino por las investigaciones por «posibles» prácticas corruptas, que en distintos países se efectúan contra algunos de sus directivos y proveedores¹⁰. Sobre todo, pone de relieve los dilemas de la tormenta perfecta a la que se enfrenta la economía venezolana, dependiente de los ingresos en divisas procedentes de la exportación de petróleo (95 por 100), que enfrenta una crisis con rasgos de emergencia. Al respecto, el propio presidente Nicolás Maduro pone énfasis en la caída de 80 por 100 en los ingresos como causa de las turbulencias de la economía. Pero lo cierto es que, desde 2001, la producción petrolera viene cayendo de manera sostenida. Además, una fracción importante de producción remanente —se calcula en torno a los 600.000 barriles diarios— está comprometida para el pago en especie de los préstamos otorgados por China a la red de países chavistas que tejiese el anterior presidente, Hugo Chávez.

Tanto Brasil como Venezuela y México representan las claves más importantes en el escenario energético actual en América Latina. Son los únicos países que, por el tamaño de sus reservas, aunque en estos momentos cuentan con una menor influencia política, no obstante tienen la capacidad de influir en el escenario energético regional.

5. Conclusiones

Como menciono, en América Latina el papel del sector público está pasando de ser el monopolista básico en todo el ciclo de la energía, así como en la mayor parte de subsectores, al de un «árbitro» que determina las reglas del juego y garantiza su cumplimiento, de modo que

diferentes agentes económicos consigan competir y lograr sus objetivos en el mercado. Este importante cambio del rol del Estado en el sector energético implica una situación novedosa para la política energética, las instituciones, la regulación y las normas de funcionamiento e, incluso, para aquellas personas que han tomado decisiones en un sector público que participaba en la generación, transformación y distribución de la energía, probablemente no serán válidas en un entorno más competitivo y con mayor presencia del sector privado.

En el caso de que la nueva situación generase un problema institucional, la experiencia de México puede resultar muy válida. La clave es cómo conseguir instituciones que, a diferencia de las empresas públicas participantes en el sector energético y con autonomía respecto a éstas, sean capaces de determinar unas reglas del juego equilibradas y de garantizar el cumplimiento de las mismas. Para articular este cambio son diversos los elementos en consideración. En primer lugar, el sesgo de los organismos e instituciones reguladoras. El ideal sería obtener un equilibrio entre intereses públicos e intereses privados, pero siempre existe el riesgo de que en un mercado donde ambos intereses pueden ser encontrados, los entes reguladores se inclinen por favorecer a alguno de ellos.

La solución a este conflicto no es un elemento de índole específica para el sector energético, y depende claramente del equilibrio de poderes entre lo público y lo privado, del grado de vertebración de la Administración Pública y de sus esquemas de funcionamiento. Adicionalmente, se hace necesario configurar una estructura eficiente de organismos y funciones. Dada la evolución, tanto técnica como organizativa en el sector, se hace necesario que el marco regulatorio se adapte a las necesidades de cada país y se pueda reajustar de acuerdo con las nuevas necesidades.

No cabe duda pues, que la energía y más concretamente el petróleo y el gas, se han ▷

¹⁰ El Departamento de Justicia de Estados Unidos está tratando de determinar si funcionarios de alto rango de la petrolera participan en el soborno y otros actos de corrupción que puedan haber implicado miles de millones de dólares en transacciones.

convertido, también en el siglo XXI, en una de las palancas más poderosas que condiciona el vivir cotidiano. Razón por la cual, los países productores latinoamericanos deben realizar una profunda y sincera reflexión sobre el «nacionalismo energético» y sus consecuencias, para no tropezar, pasada la coyuntura actual de bajos precios, en las piedras de la opulencia de los ingresos crecientes de las «empresas estatales», desde donde fluye el maná energético que, más que beneficiarlos, les ha supuesto en el largo plazo una fuente de problemas y obstáculos para su industrialización, para su desarrollo, sostenibilidad y bienestar para el conjunto de la sociedad.

La lección que se está extendiendo, en relación directa con la nacionalización o la mayoría estatal en las empresas y demás consorcios públicos productores de petróleo, es que «no son imprescindibles» para proporcionar al Estado buena parte de los ingresos derivados de la producción de petróleo o de gas. A través de las estructuras fiscales correspondientes, cualquier país productor se reserva, en líneas generales, entre el 70 y el 90 por 100 del valor de lo producido. Además de las regalías (*royalties* en dinero o en especie) y del impuesto sobre los beneficios, existen figuras impositivas de todo tipo.

De forma que el nacionalismo energético, en la práctica, conduce al control de las empresas energéticas para retener la riqueza en favor del Estado, obviando los específicos intereses empresariales en beneficio de los objetivos políticos del Gobierno. Pueden ser intereses de política exterior, industrial, social o de otro tipo. La idea de que la empresa desarrolle su actividad con plena autonomía, busque la máxima eficiencia, cumpla con la ley y la regulación específica que le afecte y pague todos sus

impuestos sin mayor interferencia estatal no ha sido compatible con los postulados nacionalistas, hasta el momento (Fernández-Cuesta, 2016).

Romper o mejor dicho, reestructurar y reconducir la cuestión del nacionalismo energético requiere, dada su importancia y peso socioeconómico, una política de alta envergadura con proyección no solo nacional o regional, sino internacional. El manejo de este tema por parte de cada país es decisivo para su futuro económico. Para América Latina sería deseable que las empresas energéticas se conviertan en los eslabones de una cadena de eficiencia productiva, que les inyecte mayor productividad y competitividad, pero también que conduzca a la definitiva y siempre anhelada integración regional. Recuérdese que la unificación europea también comenzó con un acuerdo sobre energía dando paso a la Comunidad del Acero y el Carbón, cuyas consecuencias han sido para Europa de innegable trascendencia económica, empresarial y social.

Bibliografía

- [1] CASILDA BÉJAR, R. (2002). «Energía y desarrollo económico en América Latina». *Boletín Económico de ICE*, nº 2750, del 2 al 8 de diciembre.
- [2] CASILDA BÉJAR, R. (2004). «América Latina y el Consenso de Washington». *Boletín Económico de ICE*, nº 2803. Madrid. América Latina: Del Consenso de Washington a la Agenda del Desarrollo de Barcelona. Documento de Trabajo (DT) 10/2005. Madrid: Real Instituto Elcano.
- [3] CASILDA BÉJAR, R. (2015). *Crisis y reinención del capitalismo*. Madrid: Editorial Tecnos.
- [4] FERNÁNDEZ-CUESTA, N. (2016). «Nacionaliza, que algo queda». *El Confidencial*. Madrid, 11 de marzo de 2016.